

art. 286 inciso 1) del digesto antes mencionado (fs. 15/16 Expte. D.G.R. N° 434/1217/D/2015).-

El contribuyente realizó la impugnación y descargo previstos en el art. 98 y 123 del Código Tributario Provincial (fs. 21/26 del Expte. tramitado ante la Autoridad de Aplicación). –

La D.G.R. emitió la Resolución N° D 299/17, del 29/05/2017, que dispuso: 1) Rechazar la impugnación interpuesta en contra del Acta de Deuda N° A 1302-2016, confeccionada en concepto de Impuesto de Sellos, confirmando la misma; 2) Rechazar el descargo realizado en el Sumario N° M 1302-2016, y aplicar una multa por la suma \$6.570,00 (Pesos Seis Mil Quinientos Setenta con 00/100), equivalente al cien por ciento (100%) del gravamen omitido. (fs. 46/47 del Expte. D.G.R. N° 434/1217/D/2015).-

Contra dicha resolución el contribuyente interpuso el presente Recurso de Apelación en los términos Art. 12 inc. 1° y 2° y Art. 134 inc. 2° del Código Tributario Provincial (fs. 50/70 del Expte. tramitado ante la Autoridad de Aplicación).-

La cuestión central de la discusión consiste en determinar si la Solicitud de Inscripción Inicial F-01 N° 06474505, configuraba la materia imponible prevista por el art. 235 del Código Tributario Provincial, a la fecha de producción del hecho sindicado como fuente de la obligación tributaria.-

El mencionado artículo establece "Por todos los actos, contratos y operaciones de carácter oneroso o susceptibles de apreciación económica e instrumentados y por las operaciones monetarias que representen entregas o recepciones de dinero que devenguen interés, efectuadas por entidades financieras regidas por la Ley 21.526, que se realizaren en el territorio de la Provincia, se pagará el impuesto establecido en el presente título. Se entenderá por instrumento toda escritura, papel o documento del que surja el perfeccionamiento de los actos, contratos y operaciones celebrados, que revista los caracteres exteriores de un título jurídico con el que pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de otro documento y con prescindencia de los actos que efectivamente realicen los contribuyentes. También se encuentran sujetos al

Expte. 396-926-2017

San Martín 362, 3° Piso, Block 2

San Miguel de Tucumán Tel. 0381-4979459 Página 13 de 25

Dr. JOSE ALBERTO LEON
VOCA
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

Dr. JORGE E. POSSE
VOCA
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

Dr. DONESSA
VOCA
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

pago de este impuesto los actos, contratos y operaciones realizados fuera de la jurisdicción de la Provincia, cuando de su texto o como consecuencia de ellos resulte que deben ser negociados, ejecutados, cumplidos en ella o cuando los bienes objeto de las transacciones se encuentren radicados o situados en el territorio provincial...”.-

Asimismo, la Ley 8.467, art. 13, inciso 2), apartado f), punto 3), vigente al momento del hecho, establecía “De conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior, el impuesto se hará efectivo de acuerdo con las siguientes alícuotas...2) Alícuotas especiales e importes fijos:...f) Del tres por ciento (3%)...Los actos que tengan por objeto la transmisión de la propiedad de automotores 0 (cero) kilómetro en general. Este impuesto también se aplicará sobre la documentación de cualquier naturaleza que se presente como título justificativo de la propiedad a los efectos de obtener la matriculación respectiva o la inscripción de la transmisión de dominio”.-

El acto, contrato u operación que sustenta el presente caso consiste en la compraventa de un automotor cero kilómetro celebrado entre el contribuyente domiciliado en calle Mitre y Laprida; Juan Bautista Alberdi; Tucumán; y Pinerolo S.A., con domicilio en Provincia de Córdoba; según surge de la Solicitud de Inscripción Inicial F-01 N° 06474505 y demás documentación que obra en el expediente tramitado ante la Autoridad de Aplicación.-

De acuerdo a la definición legal establecida por el art. 1123 Código Civil y Comercial, “Hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero”. Consecuentemente, nos encontramos ante un contrato bilateral en los términos del art. 966 Código Civil y Comercial, ya que las partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra.-

De la tipificación legal del contrato surge que existen dos obligaciones principales y correspectivas asumidas por los contratantes: transferir la propiedad de la cosa y pagar el precio.-

La obligación principal del vendedor se encuentra establecida por el art. 1137 Código Civil y Comercial, que establece: “El vendedor debe transferir al

Dr. JOSÉ ALBERTO LEÓN
TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN

Dr. JORGE E. BOSSE PONTES
TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN

comprador la propiedad de la cosa vendida. También está obligado a poner a disposición del comprador los instrumentos requeridos por los usos o las particularidades de la venta, y a prestar toda cooperación que le sea exigible para que la transferencia dominial se concrete".-

La obligación principal del comprador está prevista en el art. 1141 del Código Civil y Comercial, en los siguientes términos: "Son obligaciones del comprador: a) pagar el precio en el lugar y tiempo convenidos. Si nada se pacta, se entiende que la venta es de contado..."-.

En materia de automotores la obligación principal del vendedor -transferir la propiedad del vehículo- posee características particulares y distintivas derivadas de su régimen específico.-

La transferencia de la propiedad del automotor requiere de su inscripción en el registro, por lo que dicho acto tiene carácter constitutivo. Ello surge del art. 1 del Decreto Ley 6.582/58 al disponer que la transmisión del dominio de los automotores "solo producirá efectos entre las partes y con relación a terceros desde la fecha de su inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor". El carácter constitutivo de la inscripción también se infiere del art. 2 de la mencionada norma, que establece: "La inscripción de buena fe de un automotor en el registro confiere al titular de la misma la propiedad del vehículo y el poder de repeler cualquier acción de reivindicación, si el automotor no hubiese sido hurtado o robado".-

Corresponde señalar que la solicitud de inscripción solo puede realizarse mediante los formularios provistos por el registro. El art. 13 del Decreto Ley 6.582/58: indica: "Los pedidos de inscripción o anotación en el Registro, y en general los trámites que se realicen ante él, solo podrán efectuarse mediante la utilización de las solicitudes tipo que determine el Organismo de Aplicación, el que fijará su contenido y demás requisitos de validez..."-.

De acuerdo a lo establecido por el art. 11 del Decreto Ley 6.582/58, resulta obligatoria la inscripción del automotor en el domicilio del adquirente. La norma dispone: "El automotor tendrá como lugar de radicación, para todos sus efectos, el del domicilio del titular del dominio o el de su guarda habitual. Tales

Dr. JOSE ALBERTO LEON
VOCALES
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

Dr. JORGE E. POSSE
VOCALES
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

Dr. JORGE GUSTAVO
PRESIDENTE
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

circunstancias se acreditarán mediante los recaudos que establezca la autoridad de aplicación”.-

De lo dicho hasta aquí podemos concluir que la obligación principal de la firma vendedora Pinerolo S.A. consistía en transferir al contribuyente María Jesús S.R.L., la propiedad del automotor cero kilómetro dominio PIY 185. Dicha transferencia solo podía realizarse mediante la inscripción del automóvil en el registro correspondiente al domicilio de la apelante, Registro Seccional Juan Bautista Alberdi, Provincia de Tucumán. La inscripción revestía carácter constitutivo del derecho de propiedad del contribuyente sobre el vehículo, y solo pudo ser realizada por medio del Formulario de Inscripción Inicial F-01, provisto por el mencionado registro.-

En tales condiciones, el Formulario de Inscripción Inicial F-01 N° 06474505, suscrito por vendedor y comprador, constituye el único documento mediante el cual las partes pudieron cumplimentar el contrato de compraventa del automotor cero kilómetro antes mencionado. Ningún otro instrumento podría ser inscripto en el registro correspondiente con el efecto de transferir la propiedad del vehículo; efecto y obligación primaria buscados por los contratantes.-

Resulta erróneo sostener que la autoridad de aplicación pretende gravar como materia imponible del impuesto la Factura de compra A-0021-0000071. Según se indicó, el único documento que puede ser inscripto en el registro es el Formulario de Inscripción Inicial F-01; y no la factura de compra. Por otro lado, la entrega de la factura es objeto de una obligación del vendedor, diversa y accesoria a la transferencia de la propiedad, y se encuentra establecida por los arts. 1137 y 1145 Código Civil y Comercial.-

Tampoco resulta atendible el agravio referente a la transgresión del principio de instrumentalidad. Dicho agravio sostiene que el Formulario de Inscripción Inicial F-01 no reúne los requisitos de instrumento pasible del gravamen. Se argumenta que ese documento solo tendría por objeto la inscripción del dominio del automotor, a efectos de acreditar su titularidad.-

Dr. JOSE ALBERTO LEONI
VOCALES
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

Dr. JORGE E. ROSSE PANESSA
VOCALES
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

C.P.M. JORGE CRISTIANO JIMENEZ
PRESIDENTE
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

Según se indicó, el Formulario de Inscripción Inicial F-01, suscrito por vendedor y comprador, tiene por finalidad el cumplimiento de la obligación principal del contrato, que consiste en la transferencia del dominio del automotor cero kilómetro. La transferencia solo se concretará, con efectos entre partes y respecto de terceros, al momento de operarse la inscripción registral; por medio de dicho formulario.-

En tales condiciones el Formulario de Inscripción Inicial F-01 N° 06474505, es el único documento que canaliza el cumplimiento de la obligación de transferir la propiedad del automotor dominio PIY 185. Este instrumento reviste los caracteres exteriores de título jurídico que investirá al adquirente del dominio del bien, una vez inscripto.-

La exigibilidad del Formulario de Inscripción Inicial F-01 es tal, que en caso que el vendedor se negara a entregarlo o suscribirlo, la negativa podrá originar una acción de cumplimiento de contrato. Ello así por cuanto sin las mencionadas prestaciones no sería posible transferir del dominio del automotor; obligación que caracteriza al contrato. Es menester señalar que los mencionados formularios solo son entregados por el RNPA a los Concesionarios o Industria Terminal, de acuerdo al Art. 6 del Título 1, Capítulo 1 del Digesto de Normas Técnico Registrales del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (<http://www.dnrpa.gov.ar>).-

Por otro lado, la operación comercial bajo análisis también configura materia imponible de acuerdo al art. 235 tercer párrafo del Código Tributario Provincial. Ello ocurre por cuanto la misma debe ser ejecutada y cumplida en la Provincia, mediante la inscripción del vehículo en el registro correspondiente al domicilio del comprador. De igual modo, el bien objeto de la transacción necesariamente debe quedar radicado en esta jurisdicción. Ello resulta obligatorio según el art. 1 del Decreto Ley 6.582/58.-

El requisito de aplicabilidad del impuesto de sellos establecido por el art. 9, inciso b), acápite 2º, de la Ley 23.548 se encuentra doblemente cumplido. En primer lugar porque el tributo recae sobre una operación onerosa documentada por el Formulario de Inscripción Inicial F-01, que reviste los caracteres

JOSE ALBERTO LEON
VOCA
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

JORGE A. POSSE PONESSA
VOCA
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

instrumentales exigidos por la norma. En segundo lugar por cuanto el formulario canaliza los efectos de la operación; los cuales deben necesariamente cumplirse en esta Provincia; donde debe inscribirse el bien, y donde el mismo quedará radicado a todos sus efectos.-

Corresponde concluir que el Formulario de Inscripción Inicial F-01 N° 06474505 suscrito María Jesús S.R.L. y Pinerolo S.A., configura la materia imponible establecida por el art. 235 del Código Tributario Provincial.-

Al momento de producirse el hecho imponible, el contenido de la obligación tributaria quedó determinado por el art. 13, inciso 2), apartado f), punto 3) de la Ley 8.467. La norma establecía una alícuota del tres por ciento (3%) para los actos que tenían por objeto la transmisión de la propiedad de automotores 0 (cero) kilómetro en general. Este impuesto también se aplicaba sobre la documentación de cualquier naturaleza que se presentara como título justificativo de la propiedad a los efectos de obtener la matriculación respectiva o la inscripción de la transmisión de dominio.-

Es menester aclarar que Pinerolo S.A. CUIT N° 30-70913671-9, Ingresos Brutos N° 208-08109-8 -parte vendedora- no registraba alta con jurisdicción sede de la Provincia de Tucumán; por lo que no se le aplicaba la exención del art. 278 inciso 54. Dicha norma establecía que se encontraban exentos del gravamen los actos que tenían por objeto la transmisión de la propiedad de automotores 0 (cero) kilometro en general, celebrados por concesionarios o terminales automotrices inscriptas como contribuyentes en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Provincia de Tucumán, fueran locales o de Convenio Multilateral, con jurisdicción sede en la Provincia, o con alta en la Jurisdicción Tucumán solo para el caso de las citadas terminales automotrices.-

Otro agravio expuesto por el contribuyente consiste en que la combinación del gravamen establecido por el art. 235 del Código Tributario Provincial, con la alícuota impuesta por la Ley 8.467 y la exención establecida por la Ley 8.468, modificatoria del Art. 278 inc. 54 de aquel digesto; implicaría el establecimiento una aduana interior violatoria de los arts. 9, 10, 11, 12 y 75 inc. 13 CN.-

Dr. JOSE ALBERTO LEON
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

JORGE E. PASSE
VOCAL
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

C.P.H. JORGE GUSTAVO JIMENEZ
PRESIDENTE
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

El art. 1 de la Constitución Nacional adopta la forma federal de estado, que supone la coexistencia de distintos órdenes de gobierno con potestades institucionales, políticas, administrativas y tributarias, propias y concurrentes. El sistema se rige por el principio sentado en el art. 121, en virtud del cual, las provincias conservan todo el poder no delegado a la nación. De esta manera, las provincias otorgaron al gobierno nacional –entre otras- las competencias tributarias contenidas en los arts. 4, 75 inc. 1, 2, 3, C.N. Tales potestades se caracterizan por ser expresas y limitadas.-

La doctrina de la Corte Suprema de la Nación ha afirmado que no es objetable la facultad de las provincias para darse leyes y ordenanzas de impuestos locales, y en general todas las que juzguen conducentes a sus bienes y prosperidad, sin más limitaciones que las emanadas del art. 108 –actual 126– de la constitución. Así lo indicó el Superior Tribunal de la Nación in re “Resogli, Luis c/ Provincia de Corrientes” (Fallos: 7:373).-

El mencionado Tribunal expresó en “Rizzoti, Raúl c/ Provincia de San Juan” (Fallos: 150:419), que la creación de tributos en todas sus especies, la elección de hechos imponible como hipótesis de incidencia tributaria y formalidades de percepción son del resorte exclusivo de las provincias, cuyas facultades son amplias y discrecionales, de modo tal que el criterio de oportunidad o de acierto con que la ejerzan no es cuestión revisable por cualquier otro poder.-

La Jurisprudencia de la Corte ha vinculado esencialmente la potestad tributaria provincial a su autonomía. Dicha doctrina puede verse en el precedente “Ferrocaril del Sud c/ Municipalidad de La Plata” (Fallos: 114:282), donde indicó que es esencial a la autonomía de las provincias, la facultad de imponer contribuciones y percibir las sin intervención alguna de autoridad extraña.-

El impuesto de sellos es un tributo que grava la circulación económica, consistente en transferencias de riquezas, por la presunción de que éstas revelan cierta capacidad contributiva. El gravamen aplicado sobre el Formulario de Inscripción Inicial F-01, que tiene por finalidad el cumplimiento de la obligación principal del contrato de compraventa de un automóvil -transferencia del dominio-; no tiene relación alguna con la creación de aduanas internas.-

La imposición del gravamen implica el legítimo ejercicio de la potestad tributaria provincial. No grava el ingreso o circulación de la mercadería, sino la instrumentalidad de la operación comercial. Del formulario surge el título jurídico que otorgará al adquirente –una vez inscripto- el carácter de propietario del automotor cero kilómetro.-

La Ley 8.468, modificatoria del Art. 278 inc. 54 del Código Tributario Provincial, eximía del pago del impuesto de sellos a los actos que tenían por objeto la transmisión de la propiedad de automotores 0 (cero) kilometro en general, celebrados por concesionarios o terminales automotrices inscriptas como contribuyentes en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Provincia de Tucumán, sean locales o de Convenio Multilateral, con jurisdicción sede en la Provincia, o con alta en la Jurisdicción Tucumán solo para el caso de las citadas terminales automotrices. El contenido de la norma consistía en una típica actividad de fomento.-

El fomento es una técnica de intervención encaminada a proteger o promover aquellas actividades o establecimientos particulares, que satisfacen necesidades públicas o se estimen de utilidad general, sin usar coacción ni crear servicios públicos. Se trata de una actividad técnica de la administración que regula los derechos constitucionales mediante normas jurídicas ordenadas a promover, facilitar, incitar y proteger las actividades de los particulares en aspectos materiales e inclusive culturales. (Rodríguez, María José; “El Fomento como forma de Intervención Administrativa”, en “Servicio Público; Policía y Fomento”; Ediciones RAP; 2003; Pg.682).-

La mencionada actividad es una potestad concurrente entre la Nación y las Provincias; y se encuentra establecida por el art. 75 inc. 18 C.N. para la primera y en el art. 125 C.N. para las segundas. Esta última norma establece:

“Las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal; y promover su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la

importación de capitales extranjeros y la exploración de sus ríos, por leyes protectoras de estos fines, y con sus recursos propios...”.-

Las exenciones impositivas constituyen una de las principales herramientas en materia de fomento. En tal sentido, la ley la Ley 8.468, modificatoria del Art. 278 inc. 54 del Código Tributario Provincial, acordó la exención del impuesto de sellos a las concesionarias o terminales automotrices inscriptas como contribuyentes en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Provincia de Tucumán, sean locales o de Convenio Multilateral. El otorgamiento de dicha exención a los contribuyentes locales, lejos de implicar el establecimiento de una aduana interior, significó el legítimo ejercicio de las potestades de fomento emanadas del art. 125 C.N., con fundamento en la autonomía provincial consagrada en el art. 121 C.N.-

Limitar las potestades de fomento implicaría la desnaturalización de las superiores finalidades bienestar general tenidas en vista al crear la exención; desconocer las facultades reservadas de la Provincia en materia de prosperidad; y cercenar su autonomía.-

En forma concordante ha decidido la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Astilleros Regnicoli S.A.I.C. c/ Administración Nacional de Aduanas” (Fallos: 296:253), donde dijo: “Las normas impositivas no deben entenderse con el alcance más restringido que el texto admita, sino en forma tal que el propósito de la ley se cumpla de acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación, de donde resulta que las exenciones tributarias pueden resultar del indudable propósito de la norma y de su necesaria implicancia... Aunque las exenciones tributarias son de interpretación estricta, debe aplicarse el criterio de considerar la voluntad del legislador, en orden a la finalidad perseguida al dictarse las normas cuestionadas”.-

No resulta aplicable la jurisprudencia emanada del fallo “Transportes Rocchia S.R.L. vs. Provincia de Tucumán s/Amparo” (Expte. N° 568/08), Sentencia N° 736 del 06/12/2012, dictada por la Excma. Cámara Contencioso Administrativo Sala III; “Fontan Carmen c/ Provincia de Tucumán - D.G.R. - s/ Inconstitucionalidad (Expte. N° 214/12), Sentencia N° 1031 del 28/12/2016,

Dr. JOSE ALBERTO LEON
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

Dr. JOSE I. POSE
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

O.P.N. JOSÉ MATEO SIMONCEL
PRESIDENTE
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

dictada por la Excm. Cámara Contencioso Administrativo Sala II; "Moeremans Daniel Edgardo vs. Provincia de Tucumán - (D.G.R.) s/ Inconstitucionalidad" (Expte. N° 08/06); Sentencia N° 209 del 31/03/2011, dictada por la Excm. Cámara Contencioso Administrativo Sala II; y demás antecedentes elaborados por ese Tribunal.-

Los precedentes citados no cumplen con los requisitos enumerados por el art. 161 del Código Tributario Provincial. La norma establece como principio que el Tribunal Fiscal no será competente para declarar la inconstitucionalidad de las normas tributarias, pero podrá aplicar la jurisprudencia de las Supremas Cortes de Justicia de la Nación y de la Provincia que haya declarado la inconstitucionalidad de dicha norma. –

Los antecedentes mencionados no fueron dictados por el Superior Tribunal Nacional o Provincial, sino por órganos Judiciales inferiores, no contemplados como presupuesto de aplicabilidad.-

Por otro lado, las sentencias no se refieren a las normas aplicables al presente proceso. Este caso se encuentra regulado por las leyes N° Ley 8.467 (B.O. 30/12/2011) y 8.468 (B.O. 30/12/2011); mientras las resoluciones judiciales mencionadas declararon la inconstitucionalidad del Decreto N° 4.271 (ME) del 30/11/2004; Decreto N° 4.568 (ME) del 20/12/2004; y Resolución General N° 138 del 21/12/2004 de la DGR.-

Con relación a la pretensión de inconstitucionalidad de normas legales que rigen la Litis, corresponde señalar que el sistema de control de constitucionalidad nacional y provincial tiene carácter judicial, difuso, concreto y excepcional.-

En cuanto al órgano que lo ejerce, el sistema es judicial y difuso, porque todos los jueces pueden llevarlo a cabo, sin perjuicio de llegar a la Corte Suprema como tribunal último por vía del recurso extraordinario legislado en el art. 14 de la ley 48. Por vía de principio, sólo el poder judicial tiene a su cargo el control. Así lo decidió la Corte Suprema de la Nación en el caso "Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal S.A. c/Provincia de Salta", (Fallos: 269:243). Dijo allí que cualesquiera sean las facultades del poder ejecutivo para dejar sin efecto

Dr. JOSE ALBERTO LEAL
VOCAL
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

Dr. JORGE GUSTAVO JIMENEZ
PRESIDENTE
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

C.P.M. JORGE GUSTAVO JIMENEZ
PRESIDENTE
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

actos contrarios a las leyes, no cabe admitir que sea de su competencia el declarar la inconstitucionalidad de éstas, porque el poder judicial es, en última instancia, el único habilitado para juzgar la validez de las normas dictadas por el órgano legislativo. Esto resulta imperativo -según la Corte- tanto para el estado federal como para las provincias.-

En igual sentido se ha pronunciado la Procuración del Tesoro de la Nación. El órgano asesor sostuvo: "No corresponde al Poder Ejecutivo declarar la inconstitucionalidad de leyes nacionales, por corresponderle esto al Poder Judicial, pero sí puede, en cambio, abstenerse de aplicar una ley que considere inconstitucional. Sin embargo tal facultad sólo podrá ejercerla con suma prudencia y en casos extremos, en que aparezca la violación constitucional de un modo indudable y manifiesto, en virtud del principio de división de poderes, que hace a la esencia de nuestro régimen constitucional". (Dictámenes 84:102; 207:37; 239:285 y 250:29).-

El carácter concreto del control implica que el pronunciamiento respecto a la constitucionalidad se limita al caso en el cual fue dictado. Así lo ha decidido la Corte Suprema de la Nación en el caso "Gutiérrez, Manuel c/ Prov. de San Juan" (Fallos: 183:319). Allí expuso que los tribunales no deciden, en general, la conformidad o disconformidad de las leyes o decretos con la Constitución, sino que, dejando a salvo la independencia y autoridad de los otros poderes, resuelven si en un caso concreto y definido, los preceptos legales o reglamentarios se ajustan o no a los principios constitucionales.-

La declaración de inconstitucionalidad de una norma se limita al caso particular. No posee efectos expansivos o generales, como ocurría con las sentencias dictadas por el derogado Tribunal Constitucional, anteriormente establecido por los Arts. 22 y 134 inciso 1) de la Constitución de la Provincia de Tucumán promulgada en el año 1990.-

Respecto de la trascendencia y gravedad implicadas en la declaración de inconstitucionalidad de una norma legal, se ha dicho que "La declaración de inconstitucionalidad de una ley o de alguna de sus partes es un acto de suma gravedad institucional, que debe ser considerada "ultima ratio" del orden

Dr. JOSÉ ALBERTO LEÓN
TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN

Dr. JORGE FOSSE PUNESSA
TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN

Dr. JORGE BUSTAMO JIMÉNEZ
PRESIDENTE
TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN

jurídico. Ello fue decidido por el superior Tribunal Nacional in re “Bonfante, Alberto A. c/ Junta Nacional de Carnes” (Fallos: 288:325).-

Disiento con la opinión del Vocal preopinante en el sentido de que correspondería aplicar al presente caso la doctrina del precedente “Bulacio de Terán, María vs. Provincia de Tucumán s/Amparo (Expte. N° 86/16, Sentencia N° 1137 de fecha 02/12/2016, dictada por la Sala I de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, confirmada por sentencia N° 1715 de fecha 10/11/2017, dictada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán.-

Entiendo que los argumentos expuestos otorgan razones de convicción que impiden la aplicación del art. 160 del Código Tributario Provincial. Tales argumentos son: A) El Formulario de Inscripción Inicial F-01 N° 06474505 reviste el carácter de documento que canaliza el cumplimiento de la obligación de transferir la propiedad del automotor cero kilómetro dominio PYI 185, y posee los caracteres exteriores de título jurídico que investirá del dominio al adquirente del bien, una vez inscripto. B) En virtud del art. 11 del Decreto Ley 6.582/58, la operación comercial configura también materia imponible, en los términos del art. 235 tercer párrafo Código Tributario Provincial, por cuanto la misma debe ser ejecutada y cumplida en la Provincia, y el bien objeto de la transacción necesariamente debe quedar radicado en el territorio provincial; ambas situaciones por medio del mencionado formulario.-

En función de las consideraciones expuestas, no corresponde aplicar la excepcional facultad otorgada a este Tribunal por la norma citada. La declaración de inconstitucionalidad de las leyes que rigen el caso resulta una facultad principalmente judicial, de carácter difuso, concreto y excepcional; por lo que no se encuentran configurados los presupuestos para su aplicación al presente caso.-

Por ello, corresponde NO HACER LUGAR, al recurso de apelación interpuesto por el contribuyente MARIA JESUS S.R.L., CUIT N° 30-70948200-5, en contra de la Resolución N° 299/17 de la Dirección General de Rentas de fecha 29/05/2017, y en consecuencia confirmar la misma, conforme los argumentos expuestos anteriormente. Así voto.-

Dr. JOSE ALBERTO LEON
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

JOSÉ E. FOSSE PONTESSA
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

C.P.N. JORGE GUSTAVO JIMENEZ
PRESIDENTE
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

El señor vocal **Dr. José Alberto León**, dijo: Haciendo suyos los fundamentos vertidos por el señor vocal preopinante, C.P.N. Jorge Gustavo Jiménez, vota en idéntico sentido.-

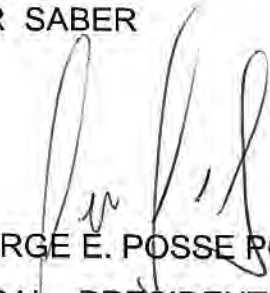
Por ello,

**EL TRIBUNAL FISCAL DE APELACIÓN
RESUELVE:**

1.- **NO HACER LUGAR** al Recurso de Apelación interpuesto por el contribuyente MARIA JESUS S.R.L., CUIT N° 30-70948200-5, en contra de la Resolución N° D 299/17 del 29/05/2017, emitida por la Dirección General de Rentas de la Provincia de Tucumán, y en consecuencia **CONFIRMAR** la misma, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes.-

2.- **REGISTRAR, NOTIFICAR**, oportunamente, devolver los antecedentes administrativos acompañados y **ARCHIVAR**.-

HACER SABER
FSC



DR. JORGE E. POSSE RONESSA

VOCAL PRESIDENTE (*en disidencia*)



DR. JOSE ALBERTO LEON


VOCAL



C.P.N. JORGE G. JIMENEZ

VOCAL

ANTE MI: Silvia Marcela Meneghello



Dr. JAVIER CRISTOBAL AMUCHASTEGUI
PROSECRETARIO
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION